



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Proyecto discutido y aprobado en sala virtual

Demandante: GLORIA TRINIDAD MARTÍNEZ CARMONA
Demandados: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
COLPENSIONES; SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS
DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.; y
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PROTECCIÓN S.A.
Radicado: 05001 31 05 018 2019 00215 01
Sentencia: S-081

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por las codemandadas PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A., al igual que el grado jurisdiccional de Consulta concedido a favor de COLPENSIONES, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín el día 30 de junio de 2020.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

GLORIA TRINIDAD MARTÍNEZ CARMONA demandó a PORVENIR S.A., a PROTECCIÓN S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la ineficacia del traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por no habersele proporcionado una información completa y comprensible, disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden de trasladar todos los aportes recibidos. Pretende además el reconocimiento de la pensión de vejez y las costas del proceso.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 29 de abril de 1962; que realizó cotizaciones al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES entre el 25 de julio de 1991 y el mes de noviembre de 1996, fecha en la que se trasladó a la AFP HORIZONTE; que a partir del mes de septiembre del año 2000 se afilió a la AFP PROTECCIÓN S.A.; que los asesores de los fondos privados le informaron que la decisión de traslado no implicaría ninguna consecuencia negativa y que era ese el régimen que más le convenía; que no le advirtieron sobre las circunstancias adversas, ni le realizaron proyección alguna de lo que sería su pensión en uno u otro régimen; y que en toda su vida laboral cuenta con 1279 semanas de cotización.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, PROTECCIÓN S.A. acepta la fecha de nacimiento de la demandante, su afiliación previa al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, así como el traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad ante la AFP HORIZONTE, advirtiendo que en toda la vida laboral el total de cotizaciones que aparecen reportadas es de 1285 semanas. Explica que a la demandante se le brindó toda la información relevante relacionada con su intención de

traslado de una manera completa, veraz y suficiente, teniendo en cuenta los protocolos de la entidad, sin que fuera su obligación para esa época realizar proyecciones o simulaciones de su posible mesada pensional. Se opuso además a las pretensiones teniendo en cuenta que el traslado se realizó de forma libre y voluntaria. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, falta de juramento estimatorio de perjuicios como requisito procesal, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del Sistema General de Pensiones e inexistencia de la obligación de devolver las cuotas de administración.

COLPENSIONES por su parte, acepta la afiliación de la demandante a esa entidad, así como el total de cotizaciones realizadas. Frente a los demás hechos, dice que no le constan por tratarse de situaciones que no le corresponden o por ser apreciaciones jurídicas que encierran una pretensión. Se opuso además a las pretensiones indicando que la demandante no reúne los requisitos para acceder a la pensión de vejez que reclama, además de que no se logró demostrar la existencia de vicio en el consentimiento alguno ni vulneración a sus derechos fundamentales. Como excepciones previas propuso falta de agotamiento de la reclamación administrativa, defecto formal de la demanda y petición antes de tiempo, mientras que como de fondo propuso prescripción, improcedencia para decretar la ineficacia de traslado de régimen, buena fe, imposibilidad de condena en costas, compensación y devolución de cuotas de administración.

PORVENIR S.A. a su turno, acepta únicamente lo relacionado con la vinculación de la demandante a esa entidad, advirtiendo que en la actualidad no es una afiliada suya. Dice que no le consta la afiliación previa efectuada al ISS, así como la mayoría de los hechos de la demanda por tratarse de situaciones frente a terceros ajenas a su conocimiento. Se opuso a las pretensiones agregando que la afiliación tiene plena validez sin que se haya configurado algún vicio en el consentimiento, gracias a que la demandante suscribió el formulario

de forma autónoma haciendo expresa mención de haberlo hecho libre y voluntariamente. Como excepciones propuso prescripción, buena fe y enriquecimiento sin causa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 30 de junio de 2020, el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ la ineficacia del traslado efectuado por la demandante al Régimen de Ahorro Individual, ordenando su regreso y reactivación a COLPENSIONES sin solución de continuidad. Ordenó además a PROTECCIÓN S.A., trasladar a COLPENSIONES todos los valores recibidos con ocasión de la afiliación de la demandante, incluyendo los rendimientos financieros, cuotas de administración y sumas adicionales de las aseguradoras, imponiendo costas a PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con lo decidido, PORVENIR S.A. presentó recurso de apelación ya que en ningún momento hubo falta de información, ya que las características del RAIS se encuentran señaladas en los artículos 59 y siguientes de la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, sin que se pueda alegar desconocimiento de la ley por prohibirlo expresamente el artículo 9º del Código Civil. Agrega que para el momento histórico en que se produce el cambio de régimen pensional, es decir, en 1998, no era factible realizar estimación del monto pensional, toda vez que, en el RAIS, se depende igualmente de variables como el rendimiento financiero de los fondos, el cual está sujeto al comportamiento fluctuante de la economía. Respecto de los gastos de administración, las deducciones se han ajustado en todo momento a los dispuesto en la ley 100 de 1993, tal como se estipula en los artículos 20 y 60 en los literales B de la Ley 100, pero, además, debe tenerse en cuenta que ya todos los aportes y ahorros fueron trasladados a PROTECCIÓN, por cuanto la demandante se encuentra

vigente en ese fondo privado, y por lo tanto no había lugar a hacer devolución de ningún concepto.

PROTECCIÓN S.A. por su parte, señala que los fondos privados de pensiones realizan un descuento sobre los aportes con una finalidad específica, como lo es generar una administración de estos dineros aportados, produciendo rendimientos financieros y cubriendo unos seguros o riesgos como los de invalidez y de sobrevivencia. Agrega que, con los rendimientos causados, se demuestra claramente que el descuento que se ha realizado ha cumplido fielmente con su finalidad, como es la administración y la producción de rendimiento financieros, por lo que, con la decisión del juzgado, se está poniendo una carga a los fondos de pensiones que implícitamente se puede interpretar como un perjuicio, en el sentido que se está poniendo a su cargo que asuman con su propio patrimonio una posible diferencia, pero debe tenerse en cuenta que los aportes en el sistema pensional, si hubieran estado en el RPM, no habrían producido los rendimientos financieros que se producen en estos regímenes privados

Se conoce del asunto también vía grado jurisdiccional de **Consulta** a favor de COLPENSIONES.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, COLPENSIONES presentó dentro del término alegatos de conclusión solicitando revocar la sentencia de primera instancia, por cuanto es improcedente autorizar el traslado de la accionante de conformidad con el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo segundo de la Ley 797 de 2003. Agrega que estamos en presencia de una situación fáctica y jurídica totalmente ajena a COLPENSIONES, cuyo actuar siempre estuvo ajustado a derecho y el traslado de régimen no le es imputable, sino que obedeció a decisión y voluntad de la demandante, plasmada con su firma en el documento

de afiliación que obra en el proceso. En caso de que la Sala decida confirmar la decisión de primera instancia, y de conformidad con lo establecido en recientes sentencias de la Corte Suprema de Justicia tales como SL 1421, SL 1452 y SL 1688 todas del año 2019, solicita que se garantice que al momento de la AFP devolver todo el capital, se haga junto con todos los rendimientos, cuotas de administración, seguros previsionales, comisiones, frutos e intereses que se hayan generado y que estos valores sean indexados

CONSIDERACIONES:

Corresponderá en esta instancia, además de resolver los temas propuestos por las apoderadas de PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A. a través de los respectivos recursos de apelación, conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA con el objeto de salvaguardar los intereses de COLPENSIONES, lo que implica revisar la legalidad de la sentencia proferida en primera instancia mediante la cual se declaró la ineficacia de la afiliación de la Sra. GLORIA TRINIDAD MARTÍNEZ CARMONA realizada al RAIS, así como las ordenes consecuenciales respecto a los dineros que cada entidad queda en la obligación de trasladar.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado plenamente acreditados, se tiene que: **i)** GLORIA TRINIDAD MARTÍNEZ CARMONA nació el 29 de abril de 1962; **(ii)** se afilió por primera vez al sistema pensional ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y comenzó a realizar cotizaciones el 25 de julio de 1991, acumulando en esa entidad un total de 195.29 semanas, fls. 24 y 37; **(iii)** el 9 de febrero de 1998 suscribió el respectivo formulario de afiliación a la entonces AFP HORIZONTE S.A., hoy PORVENIR S.A., fls. 217; y **(iv)** posteriormente se trasladó a PROTECCIÓN S.A. según formulario de vinculación del 7 de junio del año 2000, quedando afiliada a esa entidad con efectos desde el 1 de septiembre de ese mismo año y hasta la actualidad, fls. 22.

Ahora, según viene de verse, lo que pretende la demandante con la presente acción judicial, es que se declare ineficaz su traslado al RAIS administrado en este caso por las AFP PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A., para que, consecuentemente, se declare que su afiliación válida es la que corresponde a COLPENSIONES, con apoyo en que recibió un asesoramiento insuficiente e inadecuado por parte de los promotores del fondo privado, dado que, al momento de tramitar el traslado, no se tuvo en cuenta su situación particular, lo que ocasionó que abandonara un régimen que claramente le era más favorable.

Se advierte que, si bien con la demanda se pretendía igualmente el reconocimiento de la pensión de vejez, ante tal pretensión se declaró probada la excepción previa de falta de agotamiento de la reclamación administrativa propuesta por COLPENSIONES, lo que ocurrió en la etapa respectiva de la audiencia llevada a cabo en primera instancia el mismo 30 de junio de 2020.

En cualquier caso, importa reiterar, tal y como ha sido dicho en múltiples providencias en las cuales se ha dirimido el tema de la ineficacia del traslado efectuado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, amplio y suficiente, es un deber exigible desde su creación.

Así lo señaló desde las sentencias 31.989 y 31.314 ambas del 9 de septiembre de 2008, cuyas consideraciones se han venido renovando con el transcurso de los años, y en el año 2019 la tesis fue afianzada, como puede verse, entre otras, en las sentencias SL 1421, SL 1452, SL 1688 y SL 1689, todas, se repite del 2019. Como sentencia-hito sobre el tema, cabe destacar lo que se dijo en aquella primera providencia, la Rad. N° 31.989 de 2008:

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”

En la SL 1452-2019, Rad. 68852 del 3 de abril de 2019, la Corte Suprema de Justicia robusteció el criterio que apunta a considerar, como ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado, los siguientes: (i) el juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico; (ii) que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado; (iii) que le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del art. 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y (iv) que no es necesario estar ad portas de causar el derecho o tener un derecho consolidado para que se produzca la ineficacia del traslado.

En la misma providencia, se analizaron los diferentes estadios de la evolución normativa respecto de esta exigencia, cada uno de ellos con regulaciones propias que apuntan a la misma finalidad en cuanto a la garantía para el afiliado de su derecho a una debida información, bien al momento de elegir el régimen pensional, ora cuando opte por

trasladarse de régimen. Exigencias que se tornan cada vez más rigurosas, así:

1. Partiendo de una primera fase, compuesta por aquellas disposiciones que se derivaron de la Ley 100 de 1993, en sus artículos 13 literal b), 271 y 272, así como el decreto 663 de 1993 o Decreto Orgánico del Sistema Financiero dentro del cual se hallan inmersos los fondos de pensiones, momento para el cual, el alcance mínimo del deber de información incluía la ilustración de *"las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales"*
2. Vino luego una segunda etapa a partir de la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2241 de 2010, caracterizado porque obligó al análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y de los pormenores de los regímenes pensionales, Y
3. Un tercer periodo que viene dado desde la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015, tildada como la ley de doble asesoría, el cual lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

En el presente caso, no se evidencia prueba alguna que permita tener por acreditado que el fondo privado realizó en ese momento un análisis integral de las condiciones concretas y subjetivas de la afiliada, con expresión de las ventajas y desventajas de ambos regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que esta pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, incumplió el Fondo privado su deber de información a la afiliada, al no suministrarle, *"en forma clara y precisa, las características, condiciones, consecuencias y riesgos del cambio de régimen"* (SL 1689-2019)

El simple hecho de que se haya suscrito un formulario de afiliación de ninguna manera puede significar que con ello la entidad cumplió con su obligación de suministrar una información completa, precisa, adecuada y oportuna, relacionada con las ventajas y desventajas de permanecer en el ISS o trasladarse a al fondo privado. Dicho documento no contempla un análisis de su caso en particular que contenga una proyección de su situación pensional concreta y específica, en uno u otro régimen, sino que simplemente se trata de un formato preestablecido, en el cual solo hace constar que tomó la decisión de manera espontánea y sin presiones, cuestión, que, en rigor, no se está controvirtiendo en este evento. También a este respecto se ha pronunciado la jurisprudencia ordinaria, v. gr. sentencia SL 19447-2017:

*“Ese mismo compendio normativo, en su precepto 98 indica que al ser, entre otras las AFP entidades que desarrollan actividades de interés público, deben emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios, y que «en la celebración de las operaciones propias de su objeto dichas instituciones deberán abstenerse de convertir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante», es decir, **no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición, aspecto que soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló suficiente una firma en un formulario [...]**.*

Lo anterior permite dar aplicación al art. 271 de la ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, “La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”.

En consecuencia, en este puntual aspecto se confirmará la decisión adoptada en primera instancia.

De otro lado, en cuanto a decisión de ordenar también la devolución de las cuotas de administración, seguros previsionales y demás conceptos, tema cuestionado en el recurso de apelación de ambos fondos privados, basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES, de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que un asunto natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia, como por ejemplo en las sentencias SL 31989 - 2008; SL 4964 de 2018, SL 4989 de 2018, SL 1421 de 2019, SL 1688 de 2019, rad. 68838 de mayo 8 de 2019, o más recientemente la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667. En esta última dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y***

con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.

(...)

Conforme lo anterior, el Tribunal acertó en cuanto estableció que los fondos privados accionados deben retornar a Colpensiones la totalidad de los valores recibidos por concepto de «aportes, frutos, rendimientos financieros y bonos pensionales que se encuentran en la cuenta de ahorro individual», sin descontar valor alguno por «cuotas de administración, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima» (Resaltado por la Sala)

Si bien es cierto por regla general los actos jurídicos son celebrados para que sean eficaces y produzcan efectos jurídicos propios, cuando tales actos jurídicos no resultan eficaces, por haber nacido viciados en el sentido amplio del término, desde el comienzo o incluso porque llegan a desaparecer por un evento posterior a la celebración del acto, se traduce en que nunca produjeron efectos o que habiéndolos producido dejan de generarlos por una causal sobreviniente a la celebración del acto jurídico. En el primer evento, esto es, cuando se considera que el acto nunca produjo efectos, como en este caso acontece, las cosas vuelven a su estado anterior, como si aquel jamás hubiera nacido a la vida jurídica.

De otro lado, es necesario tener en cuenta que en la sentencia ya referida, la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue clara en establecer que la declaratoria de ineficacia de traslado cobija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el respectivo afiliado “... aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de

afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implican dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen...".

Dijo además en esa providencia, que:

"Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal.

(...)

De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones."

En consecuencia, la decisión deberá ser ADICIONADA en el sentido de ordenarle también a la AFP PORVENIR S.A., que proceda a devolver a COLPENSIONES las cuotas de administración, sumas adicionales de la aseguradora y porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima, recibidos durante el tiempo que la señora GLORIA TRINIDAD MARTÍNEZ CARMONA estuvo vinculada a esa entidad, aunque sin que dichas sumas deban ser indexadas según se solicita en los alegatos de conclusión presentados en esta instancia, pues se trata de una cuestión que debió plantearse en la contestación de la demanda o en el recurso de apelación, de manera que una decisión en tal sentido implicaría decidir más allá de lo pedido, lo que no resulta procedente en sentencias de segunda instancia.

Costas en esta instancia por haber resultado vencidas en el recurso, a cargo de PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A. y a favor de la

demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$908.526 a cargo de cada una de ellas.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Medellín, el día 30 de junio de 2020, y la **ADICIONA** en el sentido de ordenar también a PORVENIR S.A., que proceda a trasladar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, el valor recibido por concepto de cuotas de administración, incluyendo porcentajes de seguros y reaseguros, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima, durante el tiempo que la demandante estuvo afiliada a esa entidad.

Costas en esta instancia por haber resultado vencidas en el recurso, a cargo de PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A. y a favor de la demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$908.526 a cargo de cada una de ellas.

Lo resuelto se notifica por ESTADOS en los términos del artículo 295 del Código General del Proceso.

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N° 073
del 30 de abril de 2021

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

FRANCISCO ARANGO TORRES
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **df5c8bb3ad90472e98e1ba727cbbcafee0dd8306ffc1864184216c7222861cee**

Documento generado en 29/04/2021 10:24:42 AM